

## **LA REGULACIÓN SOCIAL, LA MOVILIDAD Y LA FORMACIÓN LABORAL EN EL NUEVO MERCADO EUROPEO DE SERVICIOS.**

**JÓZEF NIEMIEC**

Secretario Confederal de la Confederación Europea de Sindicatos  
Responsable de política del mercado interior y de la política social

Soy polaco, pero no soy fontanero e intervengo en este debate como representante de los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, en este sector tan importante para los sindicalistas europeos.

Nuestra confederación -pienso que puede resultar interesante recordarlo-, representa al conjunto de las organizaciones sindicales en la Europa ampliada, no sólo de los 25 sino de los 27 más los sindicatos turcos. Así que desde este punto de vista representamos intereses que, si bien son contradictorios, tienen bases comunes en relación al derecho de los trabajadores.

Se me ha pedido que hable de los aspectos relativos a la movilidad de los trabajadores, a la regulación social del futuro mercado interior. Pienso que se trata de un tema extremadamente importante ya que como ha recordado Philippe Herzog, en los servicios, en el corazón de estos servicios, las personas están fuertemente implicadas. Hay servicios, por ejemplo el trabajo temporal, en el que es la trabajadora o el empleado, quienes están implicados, por lo que nuestro compromiso es claro.

En mi intervención voy a tratar fundamentalmente ciertos aspectos de esta Directiva que pensamos podrían plantear problemas, como mi predecesor acaba de demostrar. En segundo lugar, desearía hablar sobre qué nivel de intervención necesitamos si hablamos del futuro mercado interior en términos de impacto para los trabajadores, sobre todo en relación a la movilidad y la desregulación social. El tercer punto que desearía abordar en mi intervención es el de la regulación eventual, que puede ser desregulación más que regulación. Se trata pues la Directiva Servicios de un debate actual, que ha generado muchas opiniones y posiciones contradictorias.

De hecho, cuando hablamos sobre todo de los aspectos sociales de la Unión Europea, los puntos de vista son diferentes. Por una parte, están los que dicen que en política social lo esencial ya se ha hecho por lo que el resto corresponde a los Estados miembros, que deberían intervenir, ya que es su responsabilidad. Por ello, si se quiere avanzar, no se debe intervenir más en este campo. Pero por otra parte estamos los que, como mi organización, no compartimos ese punto de vista.

Por el contrario, si analizamos los trabajos en el campo social, comprobaremos que hay diversas propuestas que se están debatiendo, poniendo de manifiesto que no existe consenso ni unanimidad sobre estas cuestiones. Así por ejemplo, en la Directiva sobre el tiempo de trabajo el debate no ha finalizado, y sobre el funcionamiento de las agencias de trabajo temporal existen diferentes propuestas de directivas que se han visto bloqueadas en el Consejo. A su vez, hay una propuesta de Directiva en el campo de la protección social relativa a la protección de los derechos de la pensión complementaria de los trabajadores, para solucionar los problemas de portabilidad cuando se produce una movilidad transfronteriza de los trabajadores.

Otra cuestión que se ha debatido y que se encontraba en el centro de este debate sobre la Directiva Servicios es el funcionamiento / aplicación de la Directiva para evitar el desarraigo, y más concretamente qué reglas hay que aplicar, qué medios se necesitan, cómo ponerla en marcha en cada Estado miembro...

Pero sin embargo el debate más importante se centra en la flexibilidad en el trabajo y la seguridad de la trayectoria profesional. Cuestiones que se analizan actualmente por la Comisión en relación a las mutaciones que se están produciendo en el ámbito del empleo. A su vez, se ha elaborado una propuesta para crear un fondo europeo de adaptación a la globalización.

Sin embargo, y a pesar de estas propuestas, por el momento no se encuentran soluciones aceptables para todo el mundo o para la gran mayoría y nosotros sabemos que, -

sobre todo en el campo que ha descrito a la perfección Philippe Herzog, en su intervención-, en el campo de los servicios de interés general, se trata de un vasto trabajo ya que la Comisión se debe pronunciarse acerca del seguimiento que se debe dar al Libro Blanco. Ya existe una propuesta relativa al futuro de los servicios sociales que plantea bastantes cuestiones. Por fin la Comisión va a proponer soluciones referentes a los servicios sanitarios.

Estas propuestas van a ampliarse, ya que la Comisión está preparando un Libro Verde sobre el derecho al trabajo. Algo que, para nosotros, es extremadamente importante, sobre todo si se habla de nuestras experiencias y se refiere al debate sobre la Directiva Servicios.

La Directiva Servicios era el proyecto clave para la ejecución del mercado interior, pero ha reabierto importantes grietas sociales. Suecia, desde el comienzo, se ha alarmado, se ha preocupado por esta propuesta. Para no entrar en demasiados detalles, desearía recordar tres puntos clave que despiertan preocupación, críticas o reivindicación en nuestra Confederación.

En primer lugar, trataremos el derecho al trabajo. Nuestro objetivo es que se incluya, claramente y sin ambigüedades, el derecho al trabajo en el campo de aplicación de la Directiva, y que se reconozca el derecho fundamental a las negociaciones colectivas y acciones colectivas. Al principio la Comisión nos decía que no había razón para tener dudas, pero el debate ha confirmado que existen razones y, llegados a este punto, el resultado no es suficientemente claro para nosotros. Volveré sobre esta cuestión mas tarde.

La segunda cuestión que ha generado cierto temor ha sido el campo de aplicación. Solicitamos que se excluyan ciertos servicios sensibles, como las agencias de trabajo temporal, la seguridad privada y los servicios de interés general, en concreto, los servicios de sanidad y los servicios sociales. Preferimos que estos ámbitos sean cubiertos por normas europeas específicas. Cuando Philippe Herzog ha hablado de estos dos sectores, -hablaba de la aplicación del principio del país de origen o de la aplicación del método de armonización-, nos ha convencido de que en este campo se necesita cierto nivel de armonización antes de aplicar el principio de país de origen.

El tercer punto es precisamente la forma en la que se introduce este principio del país de origen porque, al menos cuando se trata de ámbitos como el derecho al trabajo o al campo del empleo, estamos convencidos de que es preciso dejar a los Estados miembros la posibilidad de controlar y aplicar las normas nacionales que protejan los derechos de los trabajadores y el interés público.

Para profundizar un poco más en estas cuestiones, es preciso ejemplificar nuestras preocupaciones. En este sentido, pensamos que los derechos de los trabajadores deberían estar protegidos por el país de acogida y no por el país de origen, porque si son proveedores de servicios traspasan las fronteras, es decir, llevan los trabajadores con ellos.

Y, está claro, que estos trabajadores frecuentemente están cubiertos por la Directiva sobre el desarraigo de los trabajadores, que establecía claramente el principio del país de acogida en lo que se refiere al salario mínimo y a las condiciones de trabajo.

¿Por qué todas estas preocupaciones? Porque la Directiva sobre el desarraigo de los trabajadores no cubre todas las situaciones. Si se contrata a trabajadores locales para suministrar servicios ¿qué pasa? Este personal desarraigado no está dentro de la Directiva sobre el desarraigo de los trabajadores.

¿Qué condiciones debería aplicar esta empresa a los trabajadores en este caso? En nuestra opinión, confirmada por numerosos expertos jurídicos, sería necesario aplicar el derecho internacional privado, como la Convención de Roma I. Estas soluciones han sido aprobadas por las modificaciones en el Parlamento y por el Consejo, pero también existen otros aspectos.

En numerosos Estados miembros el empleo y las condiciones de trabajo están reglamentadas por las negociaciones colectivas. Debemos recordar que, en una de las reuniones, si no me equivoco en 1998, los convenios colectivos se calificaron como barreras a la libre circulación de los servicios. Se puede justificar, esto está recogido en el documento, pero no compartimos este punto de vista, crucial para nosotros, pues aspiramos a que la Directiva reconozca explícitamente este derecho fundamental a las negociaciones y acciones colectivas, y que respete los diferentes sistemas de relación del trabajo en los Estados miembros.

Sobre los derechos fundamentales se ha requerido la introducción de una cláusula en la Directiva Servicios, que ha sido admitida, sobre la libre circulación de bienes llamada cláusula Donghi que reconoce el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros. Este es un ámbito en el que ha habido problemas.

El segundo punto se refería a la aplicación de estas normas. Porque nosotros sabemos que si tratamos la circulación de los servicios existen situaciones concretas de gentes que viven estas realidades. Somos conscientes de que si bien las reglas a veces pueden ser aceptables, las realidades en los trabajos no son evidentes. Y lo que nos preocupa, es que el proyecto de Directiva ha propuesto limitar los poderes de los Estados miem-

bros para controlar e imponer su reglamentación nacional a los proveedores de servicios extranjeros. Estamos de acuerdo y preconizamos el incentivo a las prácticas no discriminatorias y proporcionales pero, para nosotros, como preconizaba el proyecto, que el país de origen sea capaz de controlar o imponer normas a una empresa en otro Estado miembro, resulta ilusorio. Hay ejemplos concretos, y me voy a referir a uno de ellos en particular. La Comisión deseaba impedir que los Estados miembros pudieran obligar a los proveedores de servicios a registrarse o a tener un representante en su territorio, o a entregar determinados documentos. Pero en el ámbito del empleo estos documentos son necesarios para controlar y hacer respetar las condiciones de trabajo mínimas. Así pues, este aspecto, sobre todo para los países escandinavos, era extremadamente importante.

Analizaremos a continuación un punto específico sobre el trabajo temporal u otros sectores sensibles. Ustedes, como estudiantes, tal vez hayan tenido ocasión de servirse de las agencias de trabajo temporal. Se trata de organismos temporales entre las empresas y los trabajadores. Este sector es muy sensible a eventuales abusos y fraudes en materia de obligación fiscal, seguridad social y, lo que es aún más preocupante para nosotros, en lo que se refiere a los salarios y condiciones de trabajo. Yo no sé si es el caso en España, pero al menos en algunos países, como en Francia, ha habido casos muy mediatizados en el que las agencias temporales o de subcontratación empleaban a trabajadores por debajo de las condiciones mínimas aceptables que se hubieran impuesto a los trabajadores nacionales. Se han elaborado diferentes reglamentaciones para luchar contra estos abusos, pero permitiendo a las agencias serias jugar un papel útil en el mercado de trabajo. Estoy convencido de que, incluso en ausencia del principio del país de origen tal y como ha sido concebido, habrá siempre una fuerte presión en favor de una desreglamentación. Por ello, demandamos la exclusión de estos sectores.

Así mismo, con referencia al sector de la seguridad privada, las posibilidades de abuso son reconocidas por las dos partes de los actores sociales. Tanto los empresarios como los sindicalistas han solicitado la exclusión de este sector debido a las fuertes diferencias de reglamentación y licencias entre los diferentes Estados miembros. Los actores sociales están convencidos de que hacen falta reglas para estimular la nivelación por encima de las normas cualitativas, para responder a las tendencias de creciente inseguridad en este sector.

Se ha afirmado que el compromiso ha permitido encontrar soluciones aceptables, pero se ha reconocido que las decisiones del Consejo, que ha respetado en gran medida este compromiso alcanzado en el Parlamento, no está suficientemente claro sobre todo cuando se trata de la exclusión al derecho al trabajo y la protección de los derechos fundamentales.

Por nuestra parte insistimos en la necesidad de que para tener claridad es preciso que esta propuesta sea neutra con relación al derecho del trabajo y al respeto de los derechos fundamentales. Hemos podido comprobar que no se alcanza una claridad suficiente cuando se trata de la exclusión o de la toma en consideración de las reivindicaciones relativas a los servicios de interés general.

Vemos que los servicios de sanidad se han excluido del campo de aplicación, pero para los servicios sociales, la definición tal y como ha sido propuesta por el Consejo, no nos conviene y determinados servicios sociales pueden volverse a encontrar en el campo de aplicación. Así pues, las normas de esta Directiva podrían volverse a aplicar a una gran parte de los servicios sociales que se pueden definir también como servicios de salud.

Por ello habrá prevemos una gran confusión, con conflictos potenciales, por la forma de definir los servicios. Si se los define como servicios de salud, sobre todo para las personas de edad avanzada, por ejemplo, deberían ser excluidos. Si se los define como servicios sociales, estarán cubiertos por esta Directiva. Nosotros votamos por excluir este sector.

También tenemos claro que la batalla que hemos librado ha dado resultados positivos demostrando que existen posibilidades de tomar en consideración las preocupaciones de los ciudadanos, pero no puede resolverse sin buscar a su vez fuera de esta Directiva. Igualmente existen ámbitos en los que se debe intervenir y esta discusión, esta batalla, es una parte de la búsqueda del equilibrio a nivel europeo, por lo que continuamos con nuestra actividad y, en concreto, con el tema de los servicios de interés general. Deseamos comprometernos plenamente ya que a nivel político vemos límites. Se ha recordado que, en el Parlamento Europeo, la idea de tener una cierta armonización de principio, o con relación al principio o de condición de aplicación de las normas del mercado interior para los servicios de interés general económico, no está suficientemente clara por lo que hemos solicitado una directiva marco.

Igualmente hemos decidido, durante nuestro último comité ejecutivo, promover una campaña utilizando la idea de una petición europea, tal y como estaba previsto por el Tratado Constitucional, para sensibilizar, explicar por nuestros afiliados nacionales por qué tenemos necesidad de tratar de una forma diferente, incluso a nivel comunitario, este sector tan importante en el campo de los servicios.

Por un lado, he afirmado que existe un gran trabajo por hacer, pero sobre todo cuando miramos el modo de trabajar de los servicios, de la Comisión y de la Dirección General de Mercado Interior, surgen gran cantidad de preguntas. Es interesante recordar

que este seminario se desarrolla en un momento en el que la Comisión analiza los resultados de la consulta pública que lanzó sobre el futuro del mercado interior con el objetivo de estimular un debate público.

Nosotros sabemos muy bien que cuando la Comisión lanzó, a principios de los años 80, los debates sobre su ambicioso proyecto de mercado interior, la dimensión social se tuvo muy en cuenta y se instauró el diálogo social. En concreto, la Comisión la reconoció en 1988, y cito: “el mercado interior es un elemento fundamental de la dirección del proyecto de mercado interior puesto que no se trata únicamente de reforzar el crecimiento económico y aumentar la competitividad externa de las empresas europeas”. Este proyecto, en la época, podía contar con el sostén activo de los Estados miembros además de los actores sociales. Podemos ver que actualmente esta dimensión social está bajo presión, lo que es particularmente visible en países como Alemania, Francia. Sin embargo, no sólo se observa en estos países que el progreso social está en peligro, sino que este peligro supone a su vez un problema también para el desarrollo del mercado interior.

Deseo volver sobre este tema tratado por la Comisión. En una evaluación inicial de la situación del mercado interior, cuando la comisión examina las posibles orientaciones de la futura política, para nosotros resulta particularmente inquietante que la dimensión social no aparezca en este análisis en su totalidad y este olvido es difícil de comprender tras dos años de controvertidos debates acerca de la Directiva Servicios y nadie ha hecho referencia al importante papel de los actores sociales y del diálogo social que pueden jugar a todos los niveles para evaluar las necesidades del mercado interior.

Volviendo a este análisis debemos subrayar que la imagen de la Comisión no es clara, ya que por un lado el mercado interior hace propuestas en las que esta dimensión social es prácticamente inexistente mientras que, por otro lado, el Consejo Europeo, recientemente, ha reconocido que es preciso conciliar el desarrollo del crecimiento económico europeo así como el desarrollo de la dimensión social.

La Comisión, cuando lanzó la agenda social para 2005-2010, reafirmó el coste que la falta de políticas sociales puede tener para la economía europea. Así pues, ¿qué es lo más importante desde nuestro punto de vista? Pensamos que el ámbito de la libre circulación de los servicios junto con la libre circulación de los trabajadores demuestra que el empleo y las políticas en materia de movilidad deberían tratarse tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Dado que el mercado interior es competencia de la Unión, también es responsabilidad suya poner orden en todas las situaciones de trabajo transfronterizo a nivel de la Unión.

Para nosotros está claro que es preciso desarrollar una reglamentación de mayor calidad. Se trata de un debate muy interesante. Actualmente, se habla de desregulación, es el término más usado. Vemos que frecuentemente este debate, para algunos, se reduce a menos regulación mientras que para nosotros está claro que es preciso tratarlo de forma diferente.

En primer lugar es preciso dotarlo de una gran transparencia, con la implantación de partes monopolizadoras, actores sociales. Por otro lado, cuando se habla de desreglamentación es preciso mirar cuándo se hace, y si se traspasa el coste de la desreglamentación hacia las empresas o hacia los trabajadores. Es preciso ver a qué nivel se hace este tipo de desreglamentación.

En concreto, se propone introducir normas voluntarias, mediante la vía de los acuerdos o de las decisiones unilaterales de las empresas, pero en el ámbito de los servicios es preciso prestar atención a que el contenido de estas normas no invada los convenios colectivos, ya que frecuentemente, es mediante esta vía por la que se regulan ciertos aspectos como la organización del trabajo y la calidad de este trabajo. En consecuencia, sobre todo en el campo en el que la calidad del servicio, la organización del trabajo, el tiempo de trabajo y la cualificaciones formen parte de los acuerdos colectivos.

Volviendo a la cuestión particular de la movilidad de los trabajadores, desearía insistir en algunos elementos esenciales que para nosotros son importantes para el mercado europeo y la movilidad europea de los trabajadores.

Pensamos que la apertura de las fronteras debería ir acompañada de una protección adecuada, existiendo cuatro condiciones clave para esta apertura.

En primer lugar, se debe basar en el principio de igualdad de los salarios y de las condiciones de trabajo, para un trabajo igual en un mismo lugar de trabajo y en el mismo territorio.

La segunda, es que las negociaciones colectivas y el sistema de las relaciones industriales se respeten completamente y se consideren con una herramienta indispensable y dinámica para hacer frente a los cambios.



La tercera es que este sistema ofrezca un igual acceso a las ventajas sociales a todos los trabajadores y que dote -es la cuarta reivindicación - a las partes, a todos los niveles implicados, también a los actores sociales, de los instrumentos y herramientas de gestión y aplicación.

Así pues, para finalizar mi intervención.. ¿qué es necesario en términos prácticos para crear este marco jurídico europeo? Me reafirmo en que el marco nacional completo. Sin extenderme mucho, voy a hablar de este marco nacional. Pensamos que son necesarias una serie de normas mínimas europeas establecidas a nivel de la Unión Europea. No tenemos las ideas suficientemente claras para decir qué normas se deberían instaurar pero estamos discutiendo el salario mínimo europeo, la renta mínima europea... y estamos convencidos de que será el objeto de nuestro debate, en nuestro congreso, que se celebrará el próximo año, el mes de mayo, en Sevilla.

Igualmente creemos que es preciso establecer principios precisos de igualdad de trato, condiciones de trabajo y en materia de salario. Ya he mencionado que necesitamos de un marco europeo para el trabajo temporal, para la seguridad privada, precisamos que la Directiva acerca del desarraigo se analice en profundidad y este debate se está llevando a cabo, sobre todo, en lo relativo en la fecha de su aplicación práctica.

Necesitamos una cualificación de las normas europeas con referencia a la protección social de los trabajadores móviles, sobre todo transfronterizos, en concreto sobre las pensiones complementarias.

También tenemos necesidad de un enfoque común en materia de tratamiento de los abusos, de subcontratación transfronteriza, que plantea problemas actualmente, con una responsabilidad de los principales empresarios y de las empresas contratistas.

Igualmente es preciso afrontar la cuestión de la protección de los trabajadores económicamente dependientes o de los trabajadores independientes ya que con frecuencia se recurre a falsos empleos independientes. Y como instrumento necesario para la puesta en práctica efectiva... es preciso una inspección social europea que pueda comprometer a los Estados miembros.

Y por último, verdaderamente se necesita una campaña informativa, para dar a conocer al público en general las realidades referidas a la emigración así como para transmitir a los trabajadores informaciones relativas a los derechos mínimos de los trabajadores. Como pueden comprobar, hay un importante trabajo por hacer.

Desearía hablarles de los retos que esto constituye también para los sindicatos pues ellos tienen su propia responsabilidad. En la actualidad, existe en este sentido un compromiso de nuestras organizaciones nacionales, de las federaciones, o de las cooperaciones bilaterales, sobre todo entre los países en los que los flujos migratorios son importantes, por ejemplo en Polonia y Gran Bretaña.

Así mismo debemos hacer referencia a esta la actividad, a las actividades sindicales tendientes a responder a los desafíos en las regiones transfronterizas, Tenemos estructuras específicas, consejos sindicales interregionales donde desarrollamos nuestras actividades; somos conscientes de que es nuestra responsabilidad.

El mayor desafío puede encontrarse en el campo del diálogo social ya que cuestiones importantes como la formación de los trabajadores, la calidad de los servicios o la organización del trabajo se pueden hacer por esta vía. Y se trata de una actividad esencialmente desarrollada por nuestras federaciones europeas. Ellas se han comprometido, por ejemplo, en el campo de servicios, de los servicios de seguridad y de los servicios de salud. Así pues, esta es nuestra obligación para el futuro. No voy a desarrollar más este aspecto, pero desearía subrayar que se trata de un trabajo importante. También tenemos nuestra parte de responsabilidad en este trabajo.

Evidentemente, esto nos lleva a la cuestión de la financiación de estos servicios, el futuro de los sistemas de protección social y el futuro de los sistemas fiscales. Debo señalar que estos problemas van unidos a los medios que aplicamos en relación a nuestras ambiciones en este ámbito.

Para concluir, diría que cuando hablamos del mercado interior de los servicios, la libre circulación, la desregulación social, es preciso volver a lo esencial. Se está a favor de la libre circulación sobre la base de la competencia leal, leal de no discriminación y pensamos que, si se refuerza el modelo social europeo, de manera que se pueda dar y mantener una protección de base a los trabajadores, ciudadanos europeos, daremos respuesta a un sentimiento creciente de inseguridad social.

La aceptación del desarrollo de las políticas europeas en países en los que la apertura de los mercados se combina o se mantiene mediante sistemas de aportación de seguridad a las trayectorias profesionales y la inversión masiva en los sistemas de protección social, muestra el camino a seguir por el conjunto de la Unión Europea.

Muchas gracias por su atención.